PROGRAMA 9110

CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

1. DESCRIPCIÓN

El Tribunal de Cuentas gestiona únicamente el programa 9110 “Control Externo del Sector Público”, a través del cual desarrolla sus actividades. En consecuencia, existe una total coincidencia entre los objetivos del Sector y los del programa, por lo que su descripción se hace en una única memoria, es decir en la del programa.

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo.

Son funciones propias del Tribunal de Cuentas (artículo 2 de la Ley 2/1982):

- La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público.
- El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

2. ACTIVIDADES

2.1. Realización de las actuaciones fiscalizadoras previstas en el Programa anual de Fiscalizaciones

Tanto desde la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas, como desde el Plan Estratégico se hace una apuesta por ampliar la fiscalización en áreas como la transparencia, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental. Entre los nuevos ámbitos de actuación englobados en el Plan se destaca la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; ámbitos que el Tribunal de Cuentas ya viene incluyendo en el ejercicio de sus controles. La contribución a la mejora de la calidad de la actividad económico-financiera pública y al buen gobierno, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción –con particular atención a áreas especialmente expuestas como la contratación y las subvenciones–, así como el

desempeño de una actuación fiscalizadora de calidad constituyen objetivos estratégicos esenciales.

Las actuaciones fiscalizadoras concretas que el Tribunal llevará a cabo durante el ejercicio 2021 se especificarán en el Programa anual de Fiscalizaciones que habrá de aprobar el Pleno, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 3.a) de la LFTCu.

Los criterios que informarán dicho Programa se dirigirán a la consecución de los extremos que seguidamente se indican:

a) Emitir la Declaración de la Cuenta General del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 136.1, párrafo segundo, de la Constitución Española y en los artículos 10 de la LOTCu y 33 de la LFTCu.

b) Elaborar la Memoria Anual del Tribunal de Cuentas, según lo previsto en el artículo 136.2, párrafo segundo, de la Constitución Española, y en el artículo 13 de la LOTCu, concebida como memoria de las actuaciones fiscalizadoras y jurisdiccionales, así como de las restantes actividades llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio precedente.

c) Efectuar fiscalizaciones de tipo horizontal relativas a entidades de un mismo subsector público o de subsectores diferentes del sector público, que permitan extraer conclusiones globales y comparativas sobre la gestión fiscalizada.

d) Emitir los informes anuales de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía que carecen de Órgano de Control Externo (OCEX) propio; y, en cuanto a las restantes Comunidades, examinar los informes remitidos por sus respectivos OCEX, a los efectos previstos en el artículo 29.2 de la LFTCu. Asimismo, el TCu elaborará el Informe global del sector público autonómico, como síntesis de los resultados más relevantes contenidos en los informes anuales, elaborados tanto por el propio Tribunal como por los OCEX relativos al periodo. El ámbito objetivo de la fiscalización de las Comunidades y Ciudades Autónomas que carecen de OCEX propio se ha extendido, en los últimos ejercicios, a aspectos referidos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, a la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público autonómico, al proceso de extinción de entidades autonómicas como consecuencia de la reestructuración del citado sector público, y a la gestión de las universidades, entre otros, y para el ejercicio 2021 se seguirán analizando estos y otros nuevos aspectos de interés.

e) Ampliar y profundizar en la mejora de la rendición de cuentas y en la evaluación de la gestión económico-financiera de las Entidades Locales, con el objeto de obtener resultados representativos sobre la Administración Local. Los mismos se plasmarán, con alcance global en el Informe anual del sector público local, que ofrece los resultados del referido subsector derivados del examen de las cuentas rendidas y del análisis de ciertas áreas específicas. Se continuará manteniendo una especial actividad dirigida a promover la rendición de cuentas por parte de las Entidades Locales y de las entidades dependientes de las mismas, incluidas las Entidades menores, así como a mejorar el análisis y evaluación de las cuentas rendidas.

f) Aprobar los informes de fiscalización, como prescriben los artículos 12 de la LOTCu y 28.4 de la LFTCu; tanto los que derivan de un mandato legal expreso, entre ellos, los relativos a la financiación de partidos políticos (Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos) y a la contabilidad de los procesos electorales (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), como los realizados a instancia de las Cortes Generales o, en su ámbito respectivo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; o por propia iniciativa del Tribunal.

g) Elaborar y elevar a las Cortes Generales mociones sobre la conveniencia de proceder a una nueva regulación de determinadas áreas de la actividad del sector público u otras modificaciones organizativas o de actuación, a fin de superar las deficiencias observadas en el ejercicio de la función fiscalizadora.

Por lo tanto, el Programa de Fiscalizaciones para 2021 integrará las contenidas en el Programa anterior que se encuentren pendientes de concluir al cierre del ejercicio, las previstas en la normativa vigente, las que estime incorporar el Pleno del Tribunal por propia iniciativa y las derivadas del ejercicio de la iniciativa fiscalizadora por los demás órganos que la tienen reconocida conforme al artículo 45 de la LOTCu.

Atendiendo a lo anterior, se incorporarán al Programa del año 2021 determinadas fiscalizaciones por mandato legal, entre ellas: la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2019; la fiscalización anual de las Comunidades sin OCEX propio y de las Ciudades Autónomas; así como la fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de las mismas financiados con cargo a subvenciones públicas.

También se incluirán en el Programa otras fiscalizaciones que el Tribunal de Cuentas llevará a cabo a iniciativa parlamentaria, a solicitud de las Cortes Generales, a través de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Las fiscalizaciones por iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, que habitualmente constituyen la mayoría de las previstas en el Programa, se seleccionarán en aplicación de los objetivos estratégicos de fiscalización y de unos criterios previamente establecidos, dirigidos a ciertas áreas de gestión de especial relevancia o bien sobre aquellas áreas o entidades en las que se hubieran detectado mayores riesgos o para las que se estime oportuno efectuar un seguimiento de las recomendaciones recogidas en anteriores informes ya aprobados y, asimismo, de las correspondientes resoluciones de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Como se prevé en el Plan Estratégico 2018-2021 de la Institución, se abordarán fiscalizaciones sobre actuaciones económico-financieras de relevancia y actualidad atendiendo a las realidades concurrentes, tratando de aproximarse, además, lo más posible el control a la actividad fiscalizada. En todo caso, se tratará de una programación ajustada a los recursos disponibles para evitar que se demore en exceso la realización de las fiscalizaciones previstas, lo que a su vez afectaría a futuras programaciones anuales y a la inmediatez y eficacia deseables de los informes, memorias, mociones y notas del Tribunal de Cuentas.

El Programa de Fiscalizaciones se concibe como un documento abierto a posibles modificaciones derivadas de resoluciones parlamentarias adoptadas en el ejercicio de la aludida iniciativa fiscalizadora o bien de nuevos acuerdos del Pleno del Tribunal de Cuentas para atender situaciones inicialmente no previstas que, por su urgencia e importancia, aconsejan la inclusión, modificación o supresión de alguna fiscalización.

2.2. Continuación con el impulso y potenciación de la coordinación de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas con el Tribunal de Cuentas

Se pretende continuar potenciando la coordinación, colaboración y cooperación de los OCEX con el Tribunal de Cuentas respecto a las actividades fiscalizadoras, en los ámbitos autonómico y local. Con esta pretensión se seguirán promoviendo las reuniones de coordinación y se articularán, en todos los terrenos, procedimientos de colaboración institucional, favoreciendo de este modo el establecimiento de criterios y técnicas comunes de fiscalización que garanticen la mayor eficacia de los resultados y eviten duplicidades en las actuaciones fiscalizadoras, como prescribe el artículo 29 de la LFTCu.

A tal fin, tendrán lugar las reuniones ordinarias semestrales entre los Presidentes del Tribunal de Cuentas y de los OCEX, así como las de las Comisiones de Coordinación en los ámbitos autonómico y local, y para la gestión de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. Igualmente, se continuará impulsando la coordinación de dichas instituciones en el área de la administración electrónica, al objeto

de promover conjuntamente aplicaciones de interés común y proceder a su gestión compartida, lo que aumenta la eficiencia y reduce los costes para cada entidad. Igualmente, desde la Comisión de Coordinación para el Impulso de la Administración Electrónica, se seguirá promoviendo conjuntamente la colaboración en el desarrollo de aplicaciones de interés común y su gestión compartida, lo que aumenta la eficiencia y reduce los costes para cada entidad.

Cabe también destacar la coordinación existente en las actuaciones encaminadas a promover la rendición de cuentas del sector público local, constituyendo la referida Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales la herramienta común básica a través de la cual se instrumenta la remisión de toda la información que han de hacer llegar tales entidades al Tribunal de Cuentas, esto es, además de las cuentas generales, la información y documentación relativa a los contratos y los convenios celebrados; y la que han de remitir los Interventores locales conforme al artículo 218.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), relativa a los acuerdos contrarios a reparos formulados y las anomalías en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa y la relativa al control interno.

Igualmente se llevarán a cabo actuaciones coordinadas de fiscalización entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX que así lo acuerden, bien mediante la intervención en trámites concretos o desarrollando fiscalizaciones conjuntas.

2.3. Tramitación y resolución de los asuntos relativos a la función jurisdiccional contable

Los objetivos prioritarios para el ejercicio de la función jurisdiccional se encaminan a agilizar la tramitación de los procedimientos de los que conocen los órganos de la jurisdicción contable, incardinados en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, en única, o en primera y segunda instancia y en ejecución de sentencia; así como la actividad de la Unidad de Actuaciones Previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables, en la que se están tramitando un considerable número de expedientes de instrucción, creciente cada año, y la de la Sala de Justicia, a través de cuyas sentencias se viene acuñando una doctrina consolidada del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable.

Durante todo el ejercicio de 2019, ingresaron en la Sección de Enjuiciamiento, como asuntos nuevos -a éstos habría que añadir los pendientes de ejercicios anteriores-,

un total de 1.218, distribuidos del modo siguiente: 327 diligencias preliminares, (artículo 46 de la Ley 7/1988), 52 acciones públicas (artículo 56 de la Ley 7/1988), 349 actuaciones previas (artículo 47 de la Ley 7/1988), 427 procedimientos de reintegro por alcance incluidos los procedimientos en fase de ejecución (artículos 73 y 85 y siguientes de la Ley 7/1988), 62 recursos de competencia de la Sala de Justicia (artículo 54 de la Ley 7/1988), 1 cancelación de fianza (artículos 75 y siguientes de la Ley 7/1988); habiéndose resuelto 673 asuntos en total (incluidas las actuaciones previas).

En el ejercicio 2020, y hasta la presente fecha, han ingresado en la Sección de Enjuiciamiento, como asuntos nuevos -a los que habría que añadir los pendientes de ejercicios anteriores-, un total de 323, distribuidos del modo siguiente: 151 diligencias preliminares de las cuales 38 son desgloses, 25 acciones públicas, 75 actuaciones previas, 56 procedimientos de reintegro por alcance, y 16 recursos de competencia de la Sala de Justicia (artículo 54 de la Ley 7/1988).

El Tribunal de Cuentas también se propone continuar avanzando en la implantación de un sistema de gestión electrónica de los procedimientos jurisdiccionales -proyecto que ya se ha impulsado en el ámbito de las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables, respecto de la fase jurisdiccional de los procedimientos-, así como de herramientas para la realización de notificaciones por vía telemática.

2.4. Emitir los informes solicitados en el ejercicio de la función consultiva prevista en la Disposición Adicional undécima de la LFTCu

La Disposición Adicional undécima de la LFTCu, introducida por el artículo 22. Dos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, ha atribuido al Tribunal el ejercicio de una función consultiva limitada a los aspectos previstos en dicha disposición.

En concreto, han de someterse a informe del Tribunal de Cuentas los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones reglamentarias que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional. El Gobierno deberá remitir dicho informe a las Cortes Generales, en el caso de referirse a anteproyectos de ley.

Asimismo, aunque no se trate en sentido estricto del ejercicio de la función consultiva prevista en dicha Disposición Adicional, el Tribunal de Cuentas también ha de elaborar los informes a que se refiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, en especial, el artículo 171.2 del TRLRHL, sobre impugnación de acuerdos de las Entidades Locales que afecten o se refieran a la nivelación presupuestaria.

2.5. Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

El Tribunal de Cuentas se encuentra sujeto a la aplicación de las disposiciones relativas al Título I (“Transparencia de la actividad pública”) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, si bien, en los términos que dispone la misma para los órganos constitucionales, esto es, en lo que se refiere a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

Dicha sujeción implica, por una parte, el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en cuanto a la información de determinada naturaleza -institucional, organizativa, económica, presupuestaria, etc.- que establece el capítulo II (“Publicidad activa”) del mencionado Título I de la Ley. En cumplimiento de dicha prescripción, el Tribunal de Cuentas ofrece la información prevista legalmente, así como otra adicional de interés para los ciudadanos, a través de su Portal web (www.tcu.es) y, en especial, mediante su Portal de la Transparencia del Tribunal de Cuentas, creado en diciembre de 2014.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, con arreglo a lo previsto en el capítulo III “Derecho de acceso a la información pública” del citado Título I de la Ley de Transparencia, resolviendo sobre las solicitudes que se le formulen en el marco de aplicación de la misma.

Asimismo, la Institución ofrece a los ciudadanos un relevante vehículo de transparencia de la gestión pública a través del Portal de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, implantado y gestionado por el Tribunal, en colaboración con la mayoría de los OCEX. A través del mismo, se pone a disposición del público, de una forma accesible y gratuita, toda la información sobre el estado de la rendición de cuentas de las entidades del sector público local, así como el contenido esencial de la totalidad de las cuentas rendidas, información que se presenta de manera estructurada para facilitar su comprensión.